

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 29° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-6484-2017
CARATULADO : ASESORIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
SEGAM LTDA/rentokil-initial chile spa

Santiago, cinco de Marzo de dos mil diecinueve

VISTOS:

Claudio Andrés Álvarez Morales, ingeniero de ejecución, en representación de Asesorías en Prevención de Riesgos Segam Limitada, ambos domiciliados en calle Antonio Varas N° 175, oficina 402, Providencia, interpone demanda en juicio ordinario de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios, en contra de Rentokil Initial Chile SpA, empresa comercial de su rubro, representada legalmente por Roberto Sánchez Sánchez, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en Avenida El Salto N° 4001, piso 9, Huechuraba.

Señala que Asesorías en Prevención de Riesgos Segam Limitada se constituyó con el objeto de otorgar asesorías en materias de prevención de riesgos, salud ambiental e ingeniería de proyectos e instalaciones en sistemas de seguridad y demás necesarias para las empresas, el comercio e industria y, en general, llevar a cabo por si misma o a través de terceros cualquier tipo de negocios lícitos que los socios acuerden.

Agrega que la sociedad Bestway S.A. contactó a su representada en septiembre de 2012 y le solicitó una asesoría. Explica que Bestway S.A. es una empresa dedicada al giro de “bebestibles, higiene y ambiente”, según indica, que requería contar con los servicios de un prevencionista de riesgos que capacitara a los trabajadores de esa empresa, en materias relativas a la prevención y seguridad en el trabajo. Dice que en razón de lo anterior, el 10 de noviembre de 2014 se suscribe entre la sociedad Bestway S.A. y Asesorías en Prevención de Riesgos Segam Limitada un contrato de prestación de asesorías en prevención de riesgos, cuyas cláusulas más relevantes serían: i) la segunda, relativa al objeto de la convención; ii) la tercera, relativa a los días, horarios y lugar de la asesoría; iii) la cuarta, relativa a las obligaciones de las partes; iv) la cláusula quinta, relativa al



Foja: 1

plazo del contrato; y, v) la sexta, relativa a prohibiciones. Luego señala que el 10 de noviembre de 2014 se suscribe entre la sociedad Vicuña Willer S.A. y su representada un contrato de prestación de asesoría en prevención de riesgos, cuyas cláusulas relevantes serían las mismas ya mencionadas. Indica que, con posterioridad, ambas empresas, esto es, Bestway S.A y Vicuña Willer S.A, representadas por Manuel Velasco Guzmán, fueron adquiridas por Rentokil Initial Chile SpA, que para todos los efectos es su actual continuadora legal.

Expresa que en razón de la suscripción de los contratos de prestación de asesorías en prevención de riesgos que fueron mencionados, Segam dispuso de un profesional prevencionista de riesgos -Fernando Alejandro Palma Zamora- para prestar la asesoría. Añade que a continuación, el sr. Palma Zamora se avocó a revisar si la demandada contaba con Reglamento Interno, si estaba actualizado, la necesidad de constituir o actualizar el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, implementar un programa de trabajo en prevención de riesgos, procedimientos y un Reglamento Especial de Contratistas, para dar cumplimiento a la Ley de Subcontratación.

Plantea que la relación contractual se cumplió estrictamente bajo los parámetros y exigencias de que dan cuenta los dos contratos de prestación de asesorías en prevención de riesgos de 10 de noviembre de 2014, que tenían una duración de 24 meses, es decir, hasta el 10 de noviembre de 2016, los que solo se podían dejar sin efecto por una comunicación escrita, indicando la decisión de poner término al contrato, con a lo menos 90 días de anticipación a la fecha de vencimiento original o de sus respectivas renovaciones.

Sostiene que recién el 15 de septiembre de 2016, no cumpliendo la demandada el plazo antedicho de al menos 90 días de anticipación, entrega una carta aviso de término de contrato por vencimiento del plazo. Dice que el 25 de octubre de 2016, en circunstancias de que la de carta aviso de término del contrato no había cumplido con el plazo de antelación convenido, y que el contrato se había renovado por 24 meses más, hasta el 10 de noviembre de 2018, infringiendo además la cláusula sexta -relativa a la prohibición de contratar directamente al profesional que su empresa dispusiera para la prestación de la asesoría- la demandada suscribe una carta de oferta laboral para Fernando Alejandro Palma Zamora, que en ese momento se encontraba vinculado laboralmente como prevencionista de riesgos de su representada. Así, la demandada habría incurrido en dos incumplimientos contractuales.



Foja: 1

En cuanto al segundo incumplimiento contractual, postula que la demandada se obligó a pagar a modo de indemnización la suma de 36 meses, de acuerdo al valor mensual de los honorarios acordados, destacando que la oferta laboral enviada por Rentokil al sr. Palma Zamora se efectuó encontrándose renovados los contratos de asesorías en prevención de riesgos (hasta el 10 de noviembre de 2018).

Luego de referirse a los requisitos de la responsabilidad contractual, precisa en torno a los daños que su representada habría padecido como consecuencia de las infracciones contractuales.

Al respecto, indica que sufrió lucro cesante, que consiste en la pérdida del incremento que habría experimentado su patrimonio de haberse cumplido los referidos contratos de asesoría en prevención de riesgos. Considera para ello el valor de la asesoría de \$1.500.000 mensuales, por lo que de haberse cumplido los contratos hasta el 10 de noviembre de 2018, debió tener un incremento patrimonial neto de \$36.000.000.

Añade que existiría una cláusula penal compensatoria en la cláusula sexta de los contratos de asesorías en prevención de riesgos, del siguiente tenor: *"El cliente no podrá contratar directamente al profesional que el Prevencionista disponga para la prestación del servicio, ni contratar los servicios que eventualmente el profesional pudiese prestar directa y/o indirectamente, en tal caso el cliente deberá cancelar al Prevencionista a modo de indemnización la suma de 36 meses de acuerdo al valor mensual acordado en el presente contrato"*.

Señala que a pesar de la existencia de dicha cláusula, la demandada, con su decisión de enviar con fecha 25 de octubre de 2016 una oferta de trabajo al sr. Palma Zamora, infringió la referida norma prohibitiva, por lo que se habría obligado a pagar la suma de 36 meses, de acuerdo al valor mensual de los honorarios acordados en el referido contrato. En consecuencia, estima que la demandada debe pagar a modo de cláusula penal compensatoria la cantidad de \$54.000.000.

Alega que si bien el artículo 1556 del Código Civil no menciona el daño moral como perjuicio indemnizable por el incumplimiento contractual, de dicha omisión no se desprende una imposibilidad de indemnizar dicho daño en materia contractual. Indica que en este caso el daño moral consiste en un severo trastorno ansioso, ya que la causa del padecimiento se relaciona con la privación de la



Foja: 1

renovación del contrato de asesoría por 24 meses, resultado que era previsible. Avalúa dicho perjuicio extrapatrimonial en \$4.000.000.

Cita el artículo 1489 del Código Civil y señala que los requisitos para acceder a esa acción serían que se trate de un contrato bilateral y que haya incumplimiento imputable de una obligación, los que se darían en la especie, en base al relato señalado. Además, quien pide el cumplimiento del contrato debe haberlo cumplido o estar llano a cumplir su propia obligación, alegando que su representada cumplió todas y cada una de las obligaciones contenidas en la cláusula cuarta del citado contrato de asesoría. Finaliza indicando con todo lo señalado, la demandada habría incumplido también con la denominada “teoría de los actos propios”, en razón de la cual a nadie sería lícito ir en contra de sus actos anteriores.

Pide se acoja la demanda y se declare que los contratos de asesorías en prevención de riesgos individualizados han sido incumplidos por la demandada y, en definitiva, sea condenada al pago de las cantidades que se demandan por los conceptos que en cada caso se indican, y que corresponden a lucro cesante, cláusula penal y daño moral, que ascienden a la cantidad total de \$94.000.000.

Con fecha 14 de junio de 2017 se notifica la demanda.

Con fecha 6 de julio de 2017 la parte demandada contesta.

Comienza controvirtiendo todas y cada una de las consideraciones de hecho, fundamentos de derecho y consecuencias jurídicas en que la demandante sustenta sus pretensiones, por considerar que su representada ha dado cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones que estos contratos le imponían, los que se encontrarían terminados y cumplidos.

Señala que Rentokil no incumplió la prohibición de contratación prevista en la cláusula sexta de los contratos, por las cuales efectivamente no podía *“contratar directamente al profesional que el Prevencionista dispone para la prestación del servicio”*. Dice que por la estipulación anterior, su defendida solicitó expresamente a la demandante autorización para proceder de tal manera, autorización que ésta le habría dado, habiéndose contratado al prevencionista sr. Fernando Palma Zamora con pleno conocimiento de Segam. Además, que dicha contratación no se produjo como consecuencia de un acto caprichoso, sino de exigencias legales derivadas de la naturaleza de los servicios que prestaba el prevencionista, pues los contratos de prestación de servicios suscritos el año 2014 entre la demandante



Foja: 1

y las sociedades que fueron adquiridas por Rentokil -Bestway S.A. y Vicuña Willer S.A.- transgredían lo dictaminado por la Dirección del Trabajo mediante el Dictamen N° 1696/024 de 12 de abril de 2010, por el cual se resolvió que las funciones desarrolladas por prevencionistas de riesgos corresponden a labores que deben ser realizadas por personas naturales y, por tanto, no son susceptibles de ser externalizadas, cuál era el caso de Segam. Por tanto, los contratos que fueron suscritos el año 2014 entre la demandante y las sociedades de las que su representada es continuadora, la exponían a ser multada por el ente fiscalizador. Agrega que, de hecho, mediante Resolución N° 8400.15-17-1 de 10 de marzo de 2015, la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte aplicó a Rentokil una multa de 40 UTM por: *"No contar con un experto en prevención contratado por la empresa Bestway SA, para dirigir el departamento de prevención de riesgo, de acuerdo a lo señalado en dictamen N°1696/24 de 2010. Tal hecho implica no prevenir íntegramente los riesgos profesionales y no disponer medidas que protejan eficazmente la vida, salud y la higiene de los trabajadores al interior de la empresa"*.

Expresa que Rentokil entregó el aviso de término de los contratos en forma oportuna y en los términos previstos en dichos pactos. Aclara que la vigencia de los acuerdos fue de 24 meses a partir de su inicio, es decir, de noviembre de 2014 a noviembre de 2016, habiéndose manifestado y comunicado, tanto informal como formalmente, que la duración de los contratos se extendería hasta noviembre de 2016. Agrega que en cumplimiento de lo señalado, con fecha 15 de septiembre de 2016 su representada comunicó a Segam su voluntad de terminar los contratos, cuestión que efectivamente se produjo al haberse dejado de prestar los servicios por Segam desde el 9 de noviembre de 2016, con la emisión y pago de una última factura, según relata. Asimismo, que una vez recibido el aviso de término de los contratos, la demandante habría argumentado la necesidad de un supuesto aviso previo que debía darse, lo que su representada desconoció, toda vez que ello no consta ni es requerido conforme a los términos contractuales. Enfatiza que en los contratos no se establece obligación alguna de dar aviso de término, ni tampoco contienen una cláusula de tácita reconducción, ni otras de naturaleza o fines semejantes. Lo anterior, por lo demás, sería consistente con el cumplimiento efectivo por Rentokil hasta el 9 de noviembre de 2016, es decir, hasta el mes 24 acordado por las partes. Reitera que en septiembre de dicho año, se comunicó a Segam por correo electrónico la intención expresa de la empresa de concluir los contratos de prestación de servicios.



Foja: 1

Sostiene que las relaciones contractuales entre las partes terminaron en noviembre de 2016. Asimismo, que los contratos corresponden a uno típico de provisión de recursos humanos, en este caso, el de un prevencionista de riesgos. Ese sería el único objeto del mismo y no puede subsistir sin tal elemento.

Para el evento que el Tribunal estime que su representada ha incumplido alguna de su(s) obligación(es), y/o que el o los contratos se "renovaron" o extendieron su vigencia, de cualquier forma y por cualquier periodo, opone la excepción de contrato no cumplido del artículo 1552 del Código Civil, toda vez que la demandante no sería un contratante diligente, porque no ha cumplido sus obligaciones contractuales y no ha ofrecido ni se encuentra llana ni en condiciones de cumplir con las obligaciones que los contratos establecen.

En cuanto a los daños reclamados, señala en lo referente al lucro cesante que atendido los términos claros de los contratos, que no establecen ninguna obligación de dar aviso de término ni tampoco una cláusula de táctica reconducción, y más aún, habiendo dado aviso de término con fecha 15 de septiembre de 2016, no concurriría en la especie ninguna pérdida de ganancia en favor de la demandante.

Respecto de la cláusula penal, dice que este ítem resulta improcedente, tanto porque no existió infracción alguna a la cláusula, como porque los contratos suscritos no establecían ninguna sanción frente a un eventual incumplimiento.

Respecto de los daños extra-patrimoniales, plantea que le resulta asombrosa la aseveración de que las personas jurídicas son susceptibles de sufrir trastornos ansiosos o angustia, sensaciones o sentimientos propios de las personas naturales.

Con fecha 14 de julio de 2017 la parte demandante evacua el trámite de la réplica.

Sostiene que la demandada reconoce que tenía prohibido en el contrato la posibilidad de contratar directamente al profesional encargado de prestar el servicio en materia de prevención de riesgos. Niega que su parte haya dado autorización para la contratación y que lo que hizo fue dar respuesta a un correo electrónico señalando que si se pagaba todo lo que correspondía, obviamente podían contratar a esa persona. Además, que el contrato que acompaña la demandada no corresponde al firmado por las partes. Asimismo, que el dictamen citado de la Dirección del Trabajo sería una opinión y que en ningún caso



Foja: 1

significaría que las empresas obligadas a tener departamento de prevención de riesgos no podían externalizar los servicios, ni contratar asesores externos en materia de prevención de riesgos, como ocurre en la especie, y que el hecho de haber continuado con la relación contractual luego de la multa cursada en 2015 reflejaría lo anterior.

En cuanto a la excepción de contrato no cumplido, señala que no tendría fundamento alguno, puesto que durante todo el tiempo en que estuvieron vigentes las obligaciones la parte demandada no presentó reclamo alguno por un supuesto incumplimiento de parte de Segam Limitada. Además, que los incumplimientos que pueden servir de fundamento a la excepción deben incidir en obligaciones emanadas del contrato, a favor de quien alega la excepción, cuestión que no habría acaecido.

Con fecha 25 de julio de 2017 la parte demandada evacua el trámite de la dúplica.

Señala que en el escrito de réplica la demandante estaría faltando a la verdad cuando reproduce en forma solo parcial la autorización otorgada a Rentokil por el representante de Segam Limitada, omitiendo la parte que da cuenta del carácter puro y simple de la autorización.

Insiste que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las partes, de común acuerdo, modificaron la cláusula quinta de los contratos de prestación de servicios suscritos el 10 de noviembre de 2014, permitiendo la contratación, destacando que cualquiera otra interpretación pugnaría con el artículo 1546 del Código Civil, que establece el principio de buena fe en la ejecución de los contratos.

Reitera alegaciones contenidas en su contestación de demanda, y reitera que durante la vigencia de los contratos la actora no dio estricto cumplimiento a sus obligaciones.

Con fecha 30 de noviembre de 2017 se llama a las partes a conciliación, sin éxito.

Con fecha 16 de abril de 2018 se recibe la causa a prueba.

Con fecha 17 de enero de 2019 se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:



I. EN CUANTO A LAS TACHAS:

PRIMERO: Que la parte demandada alega la inhabilidad relativa de los testigos Manuel José Velasco Guzmán, Sebastián Andrés Fuentes Zolezzi y Fernando Alejandro Palma Zamora. Respecto del primero, por la causal contemplada en el numeral sexto del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. Los otros dos, además de la causal señalada, por la contenida en el numeral quinto del mismo precepto. Sostiene respecto del sr. Velasco Guzmán que, por haber sido gerente general de las sociedades Bestway S.A. y Vicuña Willer S.A, cuya continuadora es la demandada, correspondería presumir la falta de imparcialidad. En cuanto a los sres. Fuentes Zolezzi y Palma Zamora, por tener una relación de subordinación o dependencia con la demandada, también carecerían de la imparcialidad necesaria para declarar en este juicio.

SEGUNDO: Que la parte demandada, por su lado, solicita el rechazo de las inhabilidades alegadas. En el caso del sr. Velasco Guzmán porque no aprecia en su testimonio un interés directo, actual y pecuniario en el resultado del juicio. En cuanto a los otros testigos, reitera que no concurre algún interés pecuniario. Y en lo tocante a la causal del numeral quinto del artículo 358 del Código Adjetivo, porque a su entender la doctrina y la jurisprudencia se encontrarían contestes en que la inhabilidad carecería de vigencia, puesto que en la actualidad existiría una flexibilización de las relaciones laborales y un mayor amparo para los trabajadores con un estatuto que les concedería más independencia respecto de sus empleadores.

TERCERO: Que en cuanto a la causal alegada respecto del testigo Manuel José Velasco Guzmán, la tacha será rechazada. Esto, porque de su relato no se evidencia la existencia de un interés directo o indirecto, actual y patrimonial, que se relacione con el resultado del pleito.

CUARTO: Que, en cambio, en cuanto a los testigos Fuentes Zolezzi y Palma Zamora, las tachas serán acogidas. En efecto, si bien tampoco se configura a su respecto la causal contenida en el numeral sexto de la norma en estudio, por las razones ya formuladas en la motivación que antecede, sin embargo, concurren los presupuestos para acoger la contenida en el numeral quinto. Lo anterior, porque de los dichos expresos y espontáneos de los testigos se colige inequívocamente que prestan servicios laborales para la empresa que los presenta a declarar, hecho que configura cabalmente la hipótesis del artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil.



Foja: 1

Por otro lado, la existencia de procedimientos como la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales del párrafo 6° del Libro V del Código del Trabajo, tiene aplicación en controversias de naturaleza laboral, y dice relación con *“las represalias ejercidas en contra de trabajadores por el ejercicio de acciones judiciales, por su participación en ellas como testigo o haber sido ofrecidos en tal calidad”*, supuestos que no se condicen con la situación de autos, ya que los testigos en cuestión fueron presentados por el propio empleador, pero también, porque la figura del Código del Trabajo se refiere a los testigos del trabajador, cosa que lógicamente no ocurre en este caso civil.

Por todo lo cual, dándose los requisitos legales, se debe entender que los testigos son inhábiles para declarar en estos autos, porque carecen de la imparcialidad necesaria para ilustrar al Tribunal acerca de la forma en que se suscitaron los hechos de la controversia, por lo que sus declaraciones no serán consideradas.

II.EN CUANTO AL FONDO:

QUINTO: Que con el fin de acreditar sus asertos, la parte demandante rindió, en lo pertinente para la presente litis, la siguiente prueba:

Instrumental.

1.- Contrato de prestación de asesoría en prevención de riesgos de fecha 10 de noviembre de 2014, entre Bestway S.A. y Segam Limitada. En el instrumento se indica en su cláusula segunda, que el objeto del contrato será que un prevencionista preste sus servicios en dicha profesión y oficio como asesor de Bestway S.A, en materias referidas a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en los términos de la Ley N° 16.744. En la cláusula tercera se estableció que los honorarios pactados ascenderían a la cantidad de \$1.000.000, que se pagarían contra factura dentro de los primeros 30 días hábiles del mes siguiente al de prestación del servicio. En la cláusula cuarta se establecieron las obligaciones de las partes y en la quinta se dispuso que el plazo del contrato sería de 24 meses contado desde la fecha de suscripción. Además, se indicó que el contrato se renovarían automáticamente por períodos mensuales de 24 meses, salvo una comunicación escrita de alguna de las partes dirigida a la contraparte, indicando la decisión de poner término al contrato con a lo menos 90 días de anticipación a la fecha de vencimiento original o la fecha de vencimiento de sus respectivas renovaciones. También, que en caso que el cliente decida poner término anticipado al contrato durante su período de vigencia, deberá pagar a



Foja: 1

Segam Limitada el saldo de las cuotas pendientes para el término del contrato o cualesquiera de sus renovaciones, y que en el evento que el cliente pase a formar parte de otra empresa, esta última asumirá todo el compromiso del contrato. Finalmente, se convino en la cláusula sexta que el cliente no podrá contratar directamente al profesional que el prevencionista disponga para la prestación del servicio, ni contratar los servicios que eventualmente el profesional pudiera prestar directa y/o indirectamente, y que en tal caso el cliente debería pagar al prevencionista a modo de indemnización, la suma de 36 meses, de acuerdo al valor mensual acordado en el contrato.

2.- Contrato de prestación de asesoría en prevención de riesgos de fecha 10 de noviembre de 2014, entre Vicuña Willer S.A. y Segam Limitada. El instrumento contiene las mismas cláusulas que el contrato antes referido, salvo el honorario pactado, el cual se fijó en la cantidad de \$500.000.

3.- Copia de una misiva de fecha 15 de septiembre de 2016 enviada por el representante legal de Bestway / Rentokil – Initial a Segam Limitada. Su tenor, en lo atinente, es el siguiente: *“De acuerdo a lo conversado previamente y encontrándonos en el plazo de hacerlo te informo que terminándose el plazo del contrato el 30 de octubre, no renovaremos el servicio de asesoría mensual en prevención de riesgos con vuestra empresa, finalizando este el 30 de octubre de 2016. Esta carta aviso de término de contrato le será despachado por correo certificado al domicilio de Segam indicado en el contrato”*.

4.- Copia de “Carta Oferta Laboral”, Código R11-F01-APC01, de fecha 25 de octubre de 2016, enviada por Rentokil Initial Chile SpA a Fernando Palma Zamora. El objeto de la carta es informar una propuesta para que el sr. Palma Zamora se incorpore a Rentokil en el cargo de jefe del Departamento de Prevención de Riesgos. Se indica que en caso de aceptación, el inicio de los servicios sería el 11 de noviembre de 2016.

5.- Copia de carta de renuncia de fecha 28 de octubre de 2016, enviada por Fernando Palma Zamora a Segam Limitada, a contar del 1 de noviembre de 2016.

Testimonial.

Alfonso Javier Quijano Maureira, quien señala que existían dos contratos, uno con la empresa Bestway y el otro con Vicuña Willer, por un período de 24 meses cada uno, por un valor \$1.000.000 y \$500.000, respectivamente, sobre asesorías en prevención. Añade que estos contratos contenían una cláusula por la



Foja: 1

cual se renovaban automáticamente por otros 24 meses, a menos que se indicara lo contrario con 90 días de anticipación, además de incluir la prohibición de contratar directamente los servicios del prevencionista, cuestión que en caso de incumplimiento acarrearía el pago de una suma equivalente a 36 meses del servicio. Todo lo anterior lo sabe y le consta porque era el prevencionista de riesgo previo a la llegada de Fernando Palma, siendo él quien presentó a esta persona a la Gerencia de ambas empresas. Indica también que el contrato habría sido incumplido, por no haberse notificado con la debida anticipación a la finalización de los contratos, motivo por lo cual éstos se renovaron automáticamente, cuestión que no fue respetada por la demandada, como tampoco la prohibición que impedía la contratación del prevencionista, tomando conocimiento de ello por un contacto que sostuvo por algún tiempo con el sr. Palma.

Pericial.

Informe evacuado por el perito designado en la causa, Francisco del Valle Herrera. Se señala que el objetivo de la pericia es la *“interpretación que cada uno de ellos [los litigantes] hace respecto a dos juegos de contratos presentados como medio de prueba en esta causa, tanto por la parte demandante como por la demandada, los que difieren en el contenido de algunas cláusulas, aun cuando supuestamente se habrían llenado y firmado en un solo acto”*.

Esto debido a que las partes presentan ejemplares disímiles de los mismos contratos, en lo referente a la existencia de una anticipación para avisar la voluntad de no persistir en tales vínculos.

El Informe arriba a las siguientes conclusiones:

“1) Que los dos contratos de prestación de asesoría en prevención de riesgos, de fecha 10-NOV-2014, suscritos por SEGAM LTDA. con BESTWAY S.A. y VICUÑA WILLER S.A. que actualmente se encuentran bajo la custodia del tribunal, y que fueron ingresados como medio de prueba por la defensa jurídica de la demandante “SEGAM LTDA”, son documentos originales, auténticos e íntegros, y no tienen ninguna evidencia de manipulación documental, lo que permite descartar la posibilidad que se hubiesen intervenido con la finalidad de agregarle distintos textos y párrafos para complementar las cláusulas quinta y sexta de dichos contratos, con la finalidad de mostrar extemporáneamente una situación distinta a la pactada originalmente.



Foja: 1

2) Que los dos contratos de prestación de asesoría en prevención de riesgos, de fecha 10-NOV-2014, suscritos por SEGAM LTDA, con BESTWAY S.A. y VICUÑA WILLER S.A. que actualmente se encuentran ingresados en el expediente virtual de la causa, y que fueron acompañados como medio de prueba por la defensa jurídica de la demandada RENTOKIL INITIAL CHILE SpA", son fotocopias en blanco y negro de muy mala calidad, tienen baja resolución, presentan escasa nitidez y todo ello empeorado por tratarse de documentos incorporados en el expediente en formato PDF que deterioran mucho más una mala imagen inicial.

El abogado que representó a la demandada en el comparendo de reconocimiento al que fueron invitadas las partes antes de iniciar el peritaje, manifestó que: "Los contratos acompañados por esta parte se encuentran en el expediente electrónico, no obstante el hecho de que con fecha 27-09-2018, mediante declaración testimonial de don Manuel Velasco Guzmán, han sido reconocidas las firmas en ambos juegos de contratos. En respuesta precisa a lo consultado por el señor perito, acerca de entregar otros documentos aparte de los ya acompañados en el expediente virtual, me remito a mi comentario anterior".

Debido a lo anterior, no hemos tenido más alternativa que analizar los contratos que se encuentran digitalizados en el expediente virtual y por las razones que se han expuesto detalladamente en los capítulos anteriores, debemos señalar que se trata de documentos que no reúnen las condiciones técnicas necesarias para descartar de plano una posible manipulación documental, por el contrario, existe una alta probabilidad de que sean el resultado de un eventual fotomontaje computacional, tal como se demostró experimentalmente en el capítulo V anterior. Como ya fue dicho anteriormente, al no haber querido transparentar su situación exhibiendo los contratos originales, la demandada "Rentokil Initial Chile SpA" deja abierto el beneficio de la duda respecto a si las fotocopias que presentó como medio de prueba en el juicio, son efectivamente una copia fiel de los originales, que supuestamente debiera tener bajo su propio resguardo o custodia.

3) Que sin perjuicio de que el ex-representante legal de las sociedades BESTWAY S.A. y VICUÑA WILLER S.A, Sr. Manuel Velasco Guzmán, reconoció ante el propio tribunal como suya la firma estampada en los contratos originales que se le exhibieron en una audiencia testimonial, este perito demostró en el capítulo IV que no hay duda de que la rúbrica del Sr. Velasco es auténtica y fue estampada en los mismos documentos que actualmente el tribunal tiene bajo su



Foja: 1

custodia, situación que en mi opinión viene a reafirmar la autenticidad de los contratos presentados por la defensa jurídica de la demandante SEGAM LTDA” (sic).

SEXTO: Que con el fin de acreditar sus alegaciones, excepciones y defensas, la parte demandada rindió, también en lo pertinente, la siguiente prueba:

Instrumental.

1.- Copia de Ordinario N° 1696/024 de fecha 12 de abril de 2010 emitido por el Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo. El documento señala que: *“no resulta conforme a derecho que las empresas obligadas legalmente a constituir Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales a cargo de un experto en prevención, puedan contratar los servicios de una empresa externa que cumpla tales funciones o que le provea de dicho experto”.*

2.- Contrato de “prestación de asesoría en prevención de riesgos” de fecha 10 de noviembre de 2014, entre Bestway S.A. y Segam Limitada. El contrato es de idéntico tenor que el acompañado por la parte demandante, salvo en la cláusula quinta, que solamente señala: *“El presente contrato comenzará a regir desde su suscripción por ambas partes y tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha estipulada”* y cláusula sexta que sólo indica: *“El cliente no podrá contratar directamente al profesional que el Prevencionista disponga para la prestación del servicio”.*

3.- Contrato de prestación de asesoría en prevención de riesgos de fecha 10 de noviembre de 2014, entre Vicuña Willer S.A. y Segam Limitada. El contrato es de idéntico tenor que el acompañado por la parte demandante, salvo en la cláusula quinta, que solamente señala: *“El presente contrato comenzará a regir desde su suscripción por ambas partes y tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha estipulada”;* y cláusula sexta, que solo indica: *“El cliente no podrá contratar directamente al profesional que el Prevencionista disponga para la prestación del servicio”.*

4.- Copia de resolución N° 234 de fecha 8 de septiembre de 2015 dictada por la Dirección Regional del Trabajo. Se resuelve mantener la multa N° 8400.15-17-1 a Bestway S.A, por la suma de 40 UTM, por no contar con un experto en prevención contratado por la empresa para dirigir el departamento respectivo.

5.- Copia de misiva de fecha 23 de abril de 2012 enviada por la Mutual de Seguridad CCHC al Superintendente de seguridad social.



Foja: 1

6.- Copia de Ordinario N° 049133 de fecha 3 de agosto de 2012, emanado de la Superintendencia de Seguridad Social y dirigido al Gerente General de la Mutual de Seguridad CCHC.

7.- Copias de correos electrónicos enviados por Banco Santander Chile a Rentokil Initial Chile SpA. Su objeto es notificar transferencias de fondos realizadas por Rentokil a Asesorías en Prevención de Riesgos por la suma \$1.500.000 –cada una- con fecha 21 de octubre de 2016, 20 de septiembre de 2016 y 18 de noviembre de 2016.

8.- Copia de cadena de correos electrónicos de fecha 24 de octubre de 2016 entre Adriana Jory Guzman de Rentokil Initial y Claudio Álvarez de Segam. En el primero se señala: *“Estimado Claudio junto con saludar y de acuerdo a lo conversado telefónicamente te solicito tu autorización formal para contratar internamente a Fernando Palma prevencionista de riesgo, desde 10 de Noviembre del 2016. Se hace presente que sr Palma presta servicios para Segam tu consultora y está asesorando en Prevención de riesgos a Bestway y luego Rentokil desde Noviembre del 2014”*. Luego, la respuesta es la siguiente: *“Estimada Adriana. Sí, ningún problema por mi parte, estoy llano a que lo contraten si es el perecer de Fernando, eso sí independiente de esto solicitaré de todos modos el pago de lo adeudado según el contrato. Pero si estoy de acuerdo”*.

9.- Copia de correo electrónico de fecha 23 de noviembre de 2016, enviado por Claudio Álvarez M. de Segam a Adriana Jory Guzman de Rentokil Initial. El tenor es el siguiente: *“Adriana. Recibí el llamado de Mallaray Chandía comunicándome que usted había entregado la instrucción de no recibir más facturas de Segam cuando sabe que restan 9 días por cancelar, aun así la factura se entregó. Comunico que esos 9 días fueron entregados como servicio por nuestra empresa y usted lo sabe, si la factura no se cancela durante los próximos 30 días solicitaré el cobro tomando las instancias legales correspondientes”* (sic).

Testimonial.

Manuel José Velasco Guzmán, quien señala haber sido Gerente General en las empresas que habrían suscrito el contrato de prestación de servicios con Segam Limitada, recordando que tal suscripción debió haber sido entre el 2014 o 2015, y que lo recuerda por haber vendido en aquella época dichas sociedades a Rentokil. Se le exhiben contratos acompañados por la parte que lo presenta a rendir testimonio y reconoce su firma puesta en él, señalando no recordar el



Foja: 1

contenido de los mismos, sino únicamente el haberlos firmado, pues suscribía muchos documentos.

SEPTIMO: Que así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, comenzando por los instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones fundadas en causal legal acogidas respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de su contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se les reconoce el valor probatorio que la propia ley les atribuye, según su naturaleza, salvo los privados emitidos por terceros y que no fueron ratificados en juicio.

Por otro lado, las declaraciones de Alfonso Javier Quijano Maureira y Manuel José Velasco Guzmán, presentadas por las partes demandante y demandada, respectivamente, no aportaron igual al esclarecimiento de los hechos. En efecto, mientras el primero se refirió con toda claridad y precisión a los contratos y sus cláusulas, el segundo solo recuerda haberlos firmado, pero no fue capaz de hacer memoria acerca de su contenido, escudándose en que “suscribía muchos documentos”. Además, el testigo Quijano Maureira transparentó la fuente de sus conocimientos, que en buena medida son directos, en razón del cargo que tuvo en la empresa.

De esta manera, los dichos del testigo Alfonso Quijano se valoran con arreglo a lo dispuesto en el artículo 384 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, por tenerse por veraz, lo mismo que la versión del otro testigo, aunque solo respecto del hecho de haber firmado los documentos que le fueron exhibidos.

Por último, en cuanto al informe del perito Francisco del Valle Herrera, que analizó los contratos presentados por las partes, todos firmados, concluyendo no tener duda de que la rúbrica del sr. Velasco Guzmán en los contratos acompañados por la parte demandante “es auténtica”, impresionó como serio, fundado y acabado, en relación al encargo efectuado, especialmente porque se hizo cargo de la circunstancia de no haberse acompañado por la demandada -a diferencia de la demandante- los contratos originales que debieron haber estado en su poder, para permitir su examen científico, siendo importante destacar que los asertos y prevenciones del informante son consistentes con el reconocimiento efectuado por el mismo sr. Velasco en el proceso. Por todo lo cual, el dictamen del perito será considerado en la decisión.

OCTAVO: Que, como primera cuestión, resulta indispensable despejar la pugna existente entre las partes relativa a los contratos acompañados por cada



Foja: 1

una, puesto que más allá de aceptar pacíficamente el hecho de haberlos celebrado el 10 de noviembre de 2014, disienten en cuanto a la existencia de dos de sus disposiciones, relativas a la existencia de un plazo para informar el término del vínculo y la forma en que tal comunicación debía efectuarse, así como a la existencia de una sanción en caso de inobservancia de una cláusula prohibitiva. En efecto, se advierte la existencia de contratos que son de igual tenor, salvo en sus cláusulas quinta y sexta.

Para arribar a una conclusión que sea conforme con la verdad, se considerarán dos circunstancias entrelazadas entre sí. En primer lugar, el hecho de que la actora acompañó al proceso, además de las copias de los dos contratos, los originales de éstos, y en segundo lugar, las conclusiones del perito Francisco del Valle.

De esta manera, se estará al tenor de los contratos acompañados por la parte demandante, los que además de ser originales y legibles, no presentan adulteraciones ni espacios vacíos, siendo importante consignar que tampoco se discutió la autenticidad de las firmas colocadas en estos documentos, todo lo cual lleva a dotarlos de valor y a tener como ciertas y efectivas las disposiciones convencionales que contienen, desestimándose las copias simples acompañadas por la demandada, por carecer de estas virtudes.

Al respecto, cabe reiterar lo informado por el perito, en cuanto a que se trata de *“documentos originales, auténticos e íntegros, y no tienen ninguna evidencia de manipulación documental, lo que permite descartar la posibilidad que se hubiesen intervenido con la finalidad de agregarle distintos textos y párrafos para complementar las cláusulas quinta y sexta de dichos contratos, con la finalidad de mostrar extemporáneamente una situación distinta a la pactada originalmente”*.

Asimismo, cuando dictamina que las copias simples acompañadas por la parte demandada *“son fotocopias en blanco y negro de muy mala calidad, tienen baja resolución, presentan escasa nitidez y todo ello empeorado por tratarse de documentos incorporados en el expediente en formato PDF que deterioran mucho más una mala imagen inicial”*.

En consecuencia, se valora con el carácter de escritura pública los contratos acompañados por la parte demandante, por lo que en cuanto a la existencia de su contenido, es decir, al hecho de que él fue declarado por las partes, tiene valor de plena prueba; y en cuanto a la sinceridad de las declaraciones entre las partes también hace plena prueba.



Foja: 1

NOVENO: Que superado lo anterior, puede establecerse en razón de la prueba rendida y valorada, y de los acontecimientos que son pacíficos entre las partes, los siguientes hechos:

a) Con fecha 10 de noviembre de 2014 la demandante Segam Limitada suscribe un contrato denominado “prestación de asesoría en prevención de riesgos” con Bestway S.A. y con Vicuña Willer S.A. Las cláusulas del contrato son las mismas y en virtud de ellas Segam se obliga a proporcionar los servicios de un profesional del área de prevención de riesgos, cuya labor sería asesorar a las sociedades señaladas en materias referidas a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, a cambio de lo cual recibiría un honorario ascendente a la suma de \$1.000.000 de Bestway S.A. y de \$500.000 de Vicuña Willer S.A.

En la cláusula quinta se estipula que el plazo del contrato sería de 24 meses contado desde la fecha de suscripción. Además, que el contrato se renovarían automáticamente por períodos mensuales de 24 meses, salvo una comunicación escrita de alguna de las partes dirigida a la contraparte, indicando la decisión de poner término al contrato con a lo menos 90 días de anticipación a la fecha de vencimiento original o la fecha de vencimiento de sus respectivas renovaciones. También, que en caso que el cliente decida poner término anticipado al contrato durante su período de vigencia, deberá pagar a Segam Limitada el saldo de las cuotas pendientes para el término del contrato o cualesquiera de sus renovaciones, y que en el evento que el cliente pase a formar parte de otra empresa, esta última asumirá todo el compromiso del contrato

b) La demandada Rentokil Initial Chile SpA. adquirió Bestway S.A. y Vicuña Willer S.A, y que en razón de lo dispuesto en el párrafo final de la cláusula quinta del contrato respectivo, la primera asumió los derechos y obligaciones que correspondían a las otras, que emanaban de los contratos de 10 de noviembre de 2014, antes referidos.

c) Con fecha 15 de septiembre de 2016, mediante carta enviada por Rentokil Initial SpA. a Segam Limitada, se comunicó lo siguiente: *“De acuerdo a lo conversado previamente y encontrándonos en el plazo de hacerlo te informo que terminándose el plazo del contrato el 30 de octubre, no renovaremos el servicio de asesoría mensual en prevención de riesgos con vuestra empresa, finalizando este el 30 de octubre de 2016. Esta carta aviso de término de contrato le será despachado por correo certificado al domicilio de Segam indicado en el contrato”.*



Foja: 1

d) Con fecha 24 de octubre de 2016, Adriana Jory Guzmán, en representación de Rentokil Initial SpA, envía un correo electrónico a Claudio Álvarez M, de Segam Limitada, en el que señala: *“Estimado Claudio junto con saludar y de acuerdo a lo conversado telefónicamente te solicito tu autorización formal para contratar internamente a Fernando Palma prevencionista de riesgo, desde 10 de Noviembre del 2016. Se hace presente que sr. Palma presta servicios para Segam tu consultora y está asesorando en Prevención de riesgos a Bestway y luego Rentokil desde Noviembre del 2014”*. En la misma fecha, el sr. Álvarez responde lo siguiente: *“Estimada Adriana. Sí, ningún problema por mi parte, estoy llano a que lo contraten si es el parecer de Fernando, eso sí independiente de esto solicitaré de todos modos el pago de lo adeudado según el contrato. Pero si estoy de acuerdo”*.

e) Con fecha 25 de octubre de 2016, Rentokil Initial Chile SpA envía a Fernando Palma Zamora, prevencionista de Segam, que estaba a cargo de otorgar la asesoría pactada en los contratos, una carta de oferta laboral del siguiente tenor: *“informar propuesta para que el señor Palma Zamora se incorpore a Rentokil en el cargo de jefe de departamento de prevención de riesgos. Se indica que en caso de aceptación, el inicio de los servicios sería el día 11 de noviembre de 2016”*.

f) Con fecha 28 de octubre de 2016, Fernando Palma Zamora remite a Segam carta de renuncia voluntaria, la que se haría efectiva a contar del día 1 de noviembre de 2016.

g) Con fecha 23 de noviembre de 2016, Claudio Álvarez M, de Segam Limitada, remite correo electrónico a Adriana Jory Guzmán, de Rentokil Initial SpA, indicando lo siguiente: *“Adriana. Recibí el llamado de Mallaray Chandía comunicándome que usted había entregado la instrucción de no recibir más facturas de Segam cuando sabe que restan 9 días por cancelar, aun así la factura se entregó. Comunico que esos 9 días fueron entregados como servicio por nuestra empresa y usted lo sabe, si la factura no se cancela durante los próximos 30 días solicitaré el cobro tomando las instancias legales correspondientes”*.

DECIMO: Que la acción deducida encuentra su fundamento en el artículo 1489 del Código Civil, que dispone: *“En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios”*.



Foja: 1

Por tanto, estimándose que el vínculo obligacional encuentra su génesis y fundamento en contratos de naturaleza bilateral, para que la acción prospere es necesario determinar la existencia de los incumplimientos reprochados.

UNDECIMO: Que el primer incumplimiento reprochado por la actora dice relación con que la demandada no habría respetado el plazo establecido en los contratos (cláusula quinta), pretendiendo ponerles término anticipadamente, mediante comunicación de 15 de septiembre de 2016, sin cumplir el plazo de 90 días que había sido estipulado.

Pues bien, del análisis de la cláusula quinta -en comento- puede afirmarse:

i) Que la duración de los contratos era de 24 meses, contados desde la fecha de suscripción. Así, comenzaron a regir el 10 de noviembre de 2014 y terminaban el 10 de noviembre de 2016.

ii) Que los contratos se renovarían automáticamente por 24 meses más, salvo que existiera voluntad en contrario manifestada por alguno de los contratantes, la que se debía materializar en una comunicación escrita, con al menos 90 días de anticipación a la fecha de vencimiento original o de la respectiva renovación. En consecuencia, el plazo máximo para dar el aviso previamente señalado era el 10 de agosto de 2016.

iii) Que en caso que la demandada decidiera poner término anticipado a los contratos durante su vigencia, tenía que pagar a Segam Limitada el saldo de las cuotas pendientes hasta el término del contrato o de cualquiera de sus renovaciones.

Por lo señalado, debe considerarse que la carta de 15 de septiembre de 2016 enviada por Rentokil Initial Chile SpA, por medio de la cual manifiesta su voluntad de poner término a los contratos referidos, no se ajusta al tiempo estipulado en la cláusula quinta y, por tanto, no tuvo la virtud de poner término a los pactos. En razón de ello, se constata que se renovaron por 24 meses más, pero también, que habiéndose pagado el precio acordado hasta noviembre de 2016, la demandada incurrió en una situación de incumplimiento de estos contratos.

DUODECIMO: Que el segundo incumplimiento contractual imputado se vincula con el hecho de haberse enviado por Rentokil Initial Chile SpA, con fecha 25 de octubre de 2016, una oferta de trabajo a su prevencionista de riesgos, por ser contrario a lo convenido en la cláusula sexta de los contratos. Ello, porque no



Foja: 1

era permitido a la demandada contratar al profesional que la demandante había dispuesto para la asesoría, ni contratar los servicios que esa persona pudiera prestar directa y/o indirectamente.

En efecto, a partir de lo estipulado en la cláusula sexta de las convenciones, puede consignarse:

i) Que sobre la demandada pesaba una prohibición, en el sentido de no poder contratar directamente al prevencionista que la actora dispusiera para la prestación del servicio.

ii) Que en caso de incumplimiento, se pactó una cláusula penal, consistente en una suma equivalente a 36 meses del precio pactado, que la demandada tenía pagar a la demandante.

En concordancia con lo señalado, cabe destacar que Rentokil Initial Chile SpA no discutió la existencia de la prohibición, sino que planteó haber obtenido la autorización de Segam Limitada. Tal hecho fue acreditado por la demandada, mediante el correo electrónico de 24 de octubre de 2016, en que Claudio Álvarez M, por la parte demandante, manifiesta su conformidad con la contratación, añadiendo que independiente de aquello, solicitaría el pago de lo adeudado, es decir, que se cumpliera con el contrato, cuestión que no altera la autorización ni la priva de sus efectos.

Por tanto, habiéndose prestado el consentimiento por la parte en cuyo favor regía la prohibición, debe entenderse que ésta fue modificada, porque dejó de ser absoluta y, por ende, debe igualmente restarse los efectos propios que su vulneración conllevaba, concluyéndose que, en esta materia, la demandada no incurrió en una vulneración de sus deberes contractuales.

DECIMO TERCERO: Que acreditada la existencia de un incumplimiento contractual y de conformidad a lo estatuido en el inciso 3° del artículo 1547, era carga de Rentokil Initial Chile SpA. probar que actuó con diligencia y cuidado, lo que no hizo. Por consiguiente, no puede sino establecerse definitivamente que la demandada infringió la cláusula quinta de los contratos de 10 de noviembre de 2014, por no haber manifestado correcta y oportunamente su voluntad de poner término a las convenciones, lo que generó que éstas se renovaran por 24 meses más, esto es, hasta el 10 de noviembre de 2018, y no habiéndose pagado los honorarios acordados en dicho nuevo periodo, los incumplimientos deben tenerse



Foja: 1

como negligentes, por no haberse conseguido desvirtuar la presunción que operaba en contra de la deudora, encontrándose en mora.

DECIMO CUARTO: Que, por otro lado, de la lectura de la demanda fluye que los perjuicios patrimoniales que solicita la actora corresponden al lucro cesante que dice haber padecido, por no haber recibido los honorarios pactados en los contratos.

Como se señaló, estimándose que en el caso sub lite operó una renovación de las convenciones en los términos estipulados en la cláusula quinta, y que por aplicación del principio *pacta sunt servanda* los efectos de los contratos son una verdadera ley para los contratantes, como lo ejemplifica el ya citado artículo 1545 del Código Civil, el hecho de que la demandada haya pagado los honorarios convenidos -en un total de \$1.500.000- hasta el mes de octubre de 2016, solamente, evidencia que la actora ha debido soportar una privación de dineros a los que tenía derecho, como consecuencia del acuerdo de voluntades, lo que lleva a tener por acreditado el lucro cesante reclamado, por el equivalente a 24 meses de honorarios, puesto que la convención debía surtir efectos hasta el día 10 de noviembre de 2018.

En tal sentido, procede una indemnización por lucro cesante ascendente a la suma única de \$36.000.000, debiendo estimarse satisfecha la existencia de un nexo causal, pues la razón primaria y directa del daño patrimonial alegado radica precisamente en la inobservancia por la demandada de sus deberes contractuales.

Indemnización que deberá pagarse más intereses corrientes y reajustes legales, desde la notificación de la demanda hasta el pago.

DECIMO QUINTO: Que, respecto a lo solicitado a título de cláusula penal deberá estarse a lo razonado en el basamento duodécimo. Es decir, para que fuera procedente la indemnización de 36 meses solicitada -fijada en la cláusula sexta de los contratos- era menester que la demandada infringiera la prohibición de no contratar directamente al prevencionista a cargo de la prestación de los servicios profesionales convenidos por las partes, presupuesto que no se verificó en este caso, en razón de la autorización dispensada.

DECIMO SEXTO: Que, en cuanto al daño moral solicitado, sin perjuicio que persiste la discusión en la doctrina nacional así como en la jurisprudencia acerca de si es posible para una persona jurídica acceder a la reparación de un daño de



Foja: 1

tal naturaleza, lo cierto es que la formulación de la petición en el libelo es vaga, confusa en cuanto a su titular y no encuentra asidero o respaldo en la prueba rendida, lo que desde luego trae consigo su total rechazo, puesto que todo daño debe ser probado.

DECIMO SEPTIMO: Que por todo lo que se ha venido razonando, se rechazará la excepción de contrato no cumplido opuesta por la demandada. En efecto, para que opere se requiere como presupuesto esencial y *sine qua non* la existencia de un incumplimiento contractual en la parte que hace la pretensión, cuestión que no ha sido demostrada en este juicio, debiendo estimarse que, en lo tocante a sus obligaciones, la actora puede ser calificada como un contratante diligente, que ha estado llana a la observancia de sus deberes contractuales.

El profesor Jorge Baraona González sostiene en la materia que: “las obligaciones recíprocas deben cumplirse, como regla general, simultáneamente, exigencia que se impone como presupuesto de exigibilidad de ambas obligaciones y sirve de fundamento jurídico para la excepción de contrato no cumplido”. Agrega que: “si ninguna de las partes cumple o está llano a cumplir, conforme lo que dispone el artículo 1552, no hay mora debitoris para ninguna de las partes”. Concluye que: “si no hay responsabilidad parece razonable buscar un fundamento jurídico que explique el estado en que se encuentran ambas obligaciones que no han sido cumplidas y que las partes no manifiesten disposición actual al cumplimiento, y no es otro que la exigibilidad” (“La Exigibilidad de las Obligaciones: Noción y Principales Presupuestos”; en Revista Chilena de Derecho, Vol.24 N° 3, 1997, pp. 520-522).

Sin embargo, el contrato fue cumplido imperfectamente por la demandada; no por la demandante. Por ende, la contratante morosa no estaba autorizada para invocar la excepción prevista en el artículo 1552 del Código Civil.

DECIMO OCTAVO: Que la prueba no considerada especialmente, en nada altera la decisión que se hará, siendo innecesaria y/o sobreabundante, debiendo estarse las partes a las razones por las que se acogerá parcialmente la demanda.

DECIMO NOVENO: Que no se condenará en costas a la parte demandada, por no haber sido totalmente vencida.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1437, 1489, 1545, 1546, 1551, 1552 y 1698 y siguientes del Código Civil; 144, 170, 346, 358, 384 y 425 del Código de Procedimiento Civil; se declara:



Foja: 1

I. Que se acogen las tachas deducidas en contra de los testigos Sebastián Andrés Fuentes Zolezzi y Fernando Alejandro Palma Zamora.

II. Que se acoge la demanda, solo en cuanto se condena a la demandada Rentokil Initial Chile SpA. a pagar a la demandante Asesorías en Prevención de Riesgos Segam Limitada, la suma de \$36.000.000 (treinta y seis millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios por lucro cesante, más reajustes e intereses.

III. Que no se condena en costas.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Rol C-6484-2017.

Dictada por don Matías Franulic Gómez, Juez Titular del Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, cinco de Marzo de dos mil diecinueve**

